



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nº EXPEDIENTE: 001-078514

FECHA: 11 de abril de 2023

NOMBRE: ADENSVVA (Asociación para la defensa de la naturaleza al sur de Valencia)

DNI: G40587909

CORREO ELECTRÓNICO:

Le agradecemos que se ponga en contacto con el Ministerio de Ciencia e Innovación para ejercer su derecho de acceso a la información pública, consistente en:

SOLICITUD

Asunto

Solicitud de información respecto del informe pericial aportado por [REDACTED] de parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Estación Biológica de Doñana al procedimiento judicial que se tramita ante la Sección 4ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana bajo Procedimiento Ordinario n.º 358/2021

Información que solicita

- Queremos saber si ese informe cumple o no con los requisitos legales, de fondo y de forma exigidos por las instituciones Estación Biológica de Doñana y Consejo Superior de Investigaciones Científicas en cuanto a que [REDACTED] pueda hacer uso de los logos de estas dos instituciones.
- También, si es posible que, conforme a la legislación vigente y los Estatutos de estas instituciones, pueda [REDACTED] suscribir ese informe con la única firma de su persona y sin ninguna otra firma más que lo avale de otra persona de algún departamento o unidad técnica de alguna de estas instituciones.
- Por otro lado, queremos saber si el uso de los logos del Ministerio de Ciencia e Innovación, del CSIC y de la EBD implica que el informe viene avalado por estos tres organismos o sólo avala el informe el propio suscribiente.
- También, queremos saber si como funcionario de esas instituciones ha informado o no previamente del encargo por parte de la empresa distribuidora a la Estación Biológica de Doñana o del CSIC, o si el informe se realiza al amparo del algún convenio previo entre alguna de esas instituciones y la mercantil distribuidora.
- Por otro lado, queremos saber si [REDACTED] está o no sujeto a la Ley 53/1984 de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, y si goza o no de compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad privada.



6. En el supuesto de que el encargo lo haya cobrado directamente [REDACTED] queremos saber si tiene o no obligación de informar de ello a las instituciones públicas referidas; y, en este caso, si lo ha hecho o es una situación pendiente, así como el importe de lo cobrado y si debe o no presentar factura.

7. Y si el encargo lo hubiera cobrado directamente alguna de las dos instituciones, queremos saber el importe de lo cobrado y el concepto, así como la base legal que sustenta tal actuación, tanto si es un convenio como un contrato sujeto a la Ley 9/2017, como otra forma legal.

8. En cuanto a que una empresa privada pueda solicitar de la Estación Biológica de Doñana y del CSIC un informe pericial de parte, queremos saber cuál es el procedimiento para ello, base legal que lo regula, unidad técnica competente que tramita tales solicitudes por tener legalmente atribuidas tales funciones, así como si la mercantil puede o no elegir el concreto funcionario que realizará el informe así como si es posible que pueda dirigirse directamente al mismo para el encargo, contratación y facturación.

9. También queremos saber si [REDACTED] pertenece a algún concreto Grupo de Investigación que estudie las electrocuciones de avifauna, y si existen o no informes previos anteriores, publicación de los hallazgos de investigación en revistas científicas sobre la priorización de correcciones en determinados apoyos eléctricos basados en la tipología de los mismos, influencia de los apoyos corregidos sobre las aves presentes en el hábitat, así como respecto de otros aspectos analizados en el informe aportado por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.; siendo así el informe suscrito por [REDACTED] un análisis o resumen específico para la Comunidad Valenciana avalado por otro informe más amplio anterior que sigue esta línea de investigación.

10. Y desde el punto de vista del rigor científico-técnico, se considera necesario que se pronuncien sobre si existen o no en el informe elaborado por [REDACTED] para I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. vulneraciones al mismo relacionadas con la práctica expositiva, o sobre la metodología y las conclusiones a las que llega, el diseño experimental, amplitud de la muestra utilizada, validez de las hipótesis planteadas, validez de los ensayos, identificación de los aspectos analizados y demás aspectos sin dar lugar a sesgos o interpretaciones que conduzcan a conclusiones no avaladas por el método científico o que pudieran resultar falsificadas o erróneas.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD

El cómputo del plazo para resolver se inicia el día 11 de abril de 2023, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

RESOLUCIÓN | DENEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Una vez analizada su solicitud, la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, resuelve **denegar** el acceso a la información solicitada.

MOTIVACIÓN |

Al respecto se expone lo siguiente. Teniendo en cuenta lo recogido en la solicitud de información en el siguiente sentido:

CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : RAQUEL YOTTI ALVAREZ | FECHA : 09/05/2023 19:59 | Sin acción específica



1. ADENSAVA está personada en el Procedimiento Ordinario nº 4/000358/2021-DZ (N.I.G.: 46250-33-3-2021-0002342) como codemanda junto con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por ser la autora de la Resolución de 06/07/2021 por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 29-07-2021) establecidas en desarrollo del Real Decreto 1432/2008, en el que actúa como demandante la mercantil I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, con CIF A95075578 (antes denominada Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.) cuya pretensión es anular tal ampliación de las Zonas de Protección.
2. En este procedimiento judicial I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha presentado un informe pericial de parte apoyando las tesis de esta empresa distribuidora eléctrica suscrito por [REDACTED]; funcionario profesor de investigación que firma y suscribe bajo el amparo de las siglas y logotipos de la Estación Biológica de Doñana y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.

De acuerdo con lo expuesto, en la presente solicitud se reclama información y se plantean cuestiones relacionadas con un informe aportado en un procedimiento judicial en marcha y con el autor del mismo.

Según el artículo 14.1 f) de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, "1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

f) Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva."

A la hora de delimitar el alcance de este artículo, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de septiembre de 2010, dictada en los recursos de casación acumulados C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P señala aspectos que deben reproducirse:

77 Para ello, procede señalar de entrada que los escritos procesales presentados ante el Tribunal de Justicia en un procedimiento jurisdiccional poseen características muy concretas, pues guardan relación, por su propia naturaleza, con la actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia antes que con la actividad administrativa de la Comisión, actividad esta última que no exige, por otra parte, el mismo grado de acceso a los documentos que la actividad legislativa de una institución comunitaria (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, antes citada, apartado 60).

78 En efecto, estos escritos se redactan exclusivamente a los efectos de dicho procedimiento jurisdiccional y constituyen un elemento esencial del mismo. Mediante el escrito de demanda, el demandante delimita el litigio y es concretamente en la fase escrita de dicho procedimiento –al no ser obligatoria la fase oral– donde las partes facilitan al Tribunal de Justicia los elementos en base a los que éste está llamado a pronunciar su decisión jurisdiccional.

85 A este respecto, procede señalar que la protección de estos procedimientos conlleva, en particular, que se garantice el respeto de los principios de igualdad de armas y de buena administración de la justicia.

86 Pues bien, por una parte, en cuanto a la igualdad de armas, procede señalar que, como declaró en esencia el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 78 de la sentencia recurrida, si el contenido de los escritos de la Comisión tuviese que ser objeto de un debate público, las críticas vertidas frente a los mismos, más allá de su verdadero alcance jurídico, podrían influir en la posición defendida por la institución ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

87 Además, tal situación podría falsear el equilibrio indispensable entre las partes en un litigio ante los mencionados órganos jurisdiccionales –equilibrio que está en la base del principio de igualdad de armas– en la medida en que únicamente la institución afectada por una solicitud de acceso a sus documentos, y no el conjunto de partes en el procedimiento, estaría sometida a la obligación de divulgación.

CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : RAQUEL YOTTI ALVAREZ | FECHA : 09/05/2023 19:59 | Sin acción específica



92 Por otra parte, en cuanto a la buena administración de la justicia, la exclusión de la actividad jurisdiccional del ámbito de aplicación del derecho de acceso a los documentos, sin distinguir entre las distintas fases del procedimiento, se justifica por la necesidad de garantizar, durante todo el procedimiento jurisdiccional, que los debates entre las partes y la deliberación del órgano jurisdiccional que conoce del asunto pendiente se desarrollen serenamente.

93 Pues bien, la divulgación de los escritos procesales en cuestión llevaría a permitir que se ejercieran, aunque sólo fuera en la percepción del público, presiones externas sobre la actividad jurisdiccional y que se perjudicara la serenidad de los debates.

94 En consecuencia, ha de reconocerse la existencia de una presunción general de que la divulgación de los escritos procesales presentados por una institución en un procedimiento jurisdiccional perjudica la protección de dicho procedimiento, en el sentido del artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001 mientras dicho procedimiento esté pendiente.

En consecuencia, cualquier cuestionamiento al respecto del informe aportado, del encargo y procedimiento seguido, de su autor y requisitos cumplimentados y concurrentes en el mismo así como cualquier cuestión relacionada debiera ser canalizada a través del procedimiento judicial abierto, no solo para garantizar el equilibrio entre las partes sino también para evitar distorsionar, mediante la creación de un debate y canal paralelo, el procedimiento jurisdiccional y la buena administración de justicia.

De acuerdo con el art.15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, le recordamos que la normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018 y Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo) es aplicable al tratamiento de los datos personales que contiene la presente resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o bien recurso contencioso administrativo:

- De forma previa y potestativa, podrá interponer, en el plazo de un mes, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conforme con lo recogido por el art.24 de la Ley 19/2013.
- En el plazo de dos meses, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia Madrid de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 y en la Ley 39/2015.

En ambos casos, el plazo para interponer recurso o reclamación se computará a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

LA SECRETARIA GENERAL DE INVESTIGACIÓN,

Raquel Yotti Álvarez

CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : RAQUEL YOTTI ALVAREZ | FECHA : 09/05/2023 19:59 | Sin acción específica